

A LA OPINIÓN PÚBLICA

En la actualidad, nuestro país está padeciendo un grave proceso de erosión social y política que se manifiesta a través de una incontenible violencia en la que se mezclan el crimen organizado y los propios encargados de guardar el orden público. Los acontecimientos de Tlatlaya, Estado de México, en los cuales, de acuerdo con declaraciones de testigos, fueron los propios miembros del ejército los que no respetaron los derechos humanos y victimaron a un grupo de personas después de haber sostenido un enfrentamiento, constituye una acción ilegal que debería ser plenamente esclarecida por las autoridades. De igual manera, los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 25 y 26 de septiembre, en los que la policía municipal no sólo disparó en contra de estudiantes y deportistas indefensos ocasionando varias muertes, sino que también secuestró a 43 de ellos que continúan desaparecidos hasta ahora, son motivo de una muy seria preocupación, aún más si, como ha trascendido, fueron entregados a una organización de narcotraficantes. Ante esta situación, el gobierno estatal ha sido completamente desbordado, no ha mostrado capacidad de esclarecer estos condenables acontecimientos a los que lamentablemente se han venido sumando otros que muestran el terrible grado de descomposición política y social que priva en nuestro país. Estos dos brutales acontecimientos constituyen la culminación de una espiral de violencia que se ha venido incubado durante muchos años y que, por desgracia, afecta no sólo al estado de Guerrero, sino también al de Michoacán y a muchos otros en el país. El hallazgo de varias fosas con cadáveres que no han sido identificados todavía constituye un duro golpe a la conciencia moral de todos los ciudadanos mexicanos que se amplifica aún más por la falta de resultados efectivos por parte de los gobiernos estatal y federal. Todo ello convierte en urgente la recomposición del Estado de Derecho en aquellas regiones del país donde se ha erosionado a tal grado que la existencia misma del Estado y del Derecho parecen haber sido puestas en entredicho. Exigimos por ello a las autoridades la localización inmediata de los desaparecidos desde hace más de 22 días y el castigo conforme a ley a los responsables de ellas y de los crímenes que han conmocionado no sólo a nuestro país, sino a la comunidad internacional. De igual manera, en tanto profesores de una universidad pública en donde intentamos formar a los estudiantes en los ideales de la democracia y el respeto al Estado de Derecho, hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad para detener el proceso de descomposición social y política en nuestro país que por desgracia parece haber alcanzado ya a todos los niveles del Estado (municipal, estatal y federal) y a todos los partidos políticos sin excepción. Octubre de 2014.

Posgrado en filosofía moral y política de la UAM-I

Granja Dulce María
Lara Zavala María Pía
Leyva, Gustavo
Pérez Cortéz, Sergio
Rendón Alarcón Jorge
Rodríguez Zepeda, Jesús
Santiago Teresa
Tellkamp, Jörg Alejandro
Trueba Atienza, Carmen
Vargas Lozano Gabriel